DOS SENTENCIAS DE 1888 EN CASACIÓN SOBRE SENDOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA EN EL RAMO DEL PIMENTÓN MURCIANO¹

JULIÁN GÓMEZ DE MAYA

Resumen: La presente colaboración contextualiza socioeconómicamente y analiza en su significación jurídica un par de sentencias del Tribunal Supremo, recaídas ambas el año 1888 y denegatorias de la casación en sendos casos de infracción penal contra la salud pública, concretamente en el ramo de la incipiente industria pimentonera murciana.

Palabras clave: economía decimonónica, pimentón murciano, jurisprudencia penal, delitos contra la salud pública, recurso de casación.

Abstract: This collaboration socioeconomically contextualizes and analyzes in its legal significance a couple of Supreme Court rulings, both issued in 1888 and denying appeal in two cases of criminal offense against public health, specifically in the field of the incipient Murcian paprika industry.

Keywords: 19th century economy, Murcian paprika, criminal jurisprudence, crimes against public health, cassation appeal.

¹ El presente artículo se ha elaborado en el marco del Proyecto «Tradición e influencias extranjeras en la Codificación penal española: contribución de la jurisprudencia en la evolución de la Parte Especial (1870-1995)» (PID2019-105871GB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Durante las décadas de la *Restauración* de los dos Alfonsos, XII y XIII, la expansión de cultivos con propicias expectativas comerciales o, como el del pimiento pimentonero, industrializables, hubo de cobrar un peso más que sensible en la cimentación del incipiente capitalismo murciano². En su *Historia económica de la Región de Murcia*, asienta Martínez Carrión, precisamente al hilo de esa proliferada siembra de pimiento para pimentón, hasta qué punto «[...] las décadas de 1880 y 1890 constituyeron una etapa de fuerte crecimiento»³, mas fue este a coincidir justamente con la fase depresiva de la agricultura que recorre el último cuarto de la centuria⁴, de manera que, casi inevitablemente a remolque de la penuria o de la pícara avaricia y «debido a la buena cotización en los mercados internacionales, la especulación y la adulteración del producto industrial no tardaron en llegar. La última hizo acto de presencia en los años ochenta y fue el origen de que se desataran auténticas crisis a mediados de la citada década y a comienzos del siglo XX [...]», con una conflictividad —y un incidental desplome de precios y rendimientos— que hubo de suscitar «[...] entre los agentes implicados [...] la organización de productores y cosecheros, por un lado, y de fabricantes de pimentón, por otro, en la defensa de los respectivos intereses [...]»⁵, amén del control de las autoridades sobre la calidad o pureza⁶. Baste con esto para una contextualización de las adulteraciones pimentoneras, más por extenso examinadas desde su personal perspectiva, verbigracia, por Pérez de Espinardo, pero que ahora y aquí se quieren considerar en alguna muestra de la concreta casuística que sustenta las panorámicas aseveraciones antecedentes acerca de una suerte de delincuencia que aparece condicionada en buena medida por fases de escasez del producto y falta de reservas para responder a la demanda, decayendo por ende aquella —su estímulo, en la avidez— hasta una

² Miguel Rodríguez LLopis, *Historia de la Región de Murcia*, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1998, págs. 387-388; Juan González Castaño, *Breve historia de la Región de Murcia*, Murcia, Tres Fronteras, 2009, págs. 267-273.

³ José Miguel Martínez Carrión, *Historia económica de la Región de Murcia: siglos XIX y XX*, Murcia, Editora Regional de Murcia, 2002, pág. 303; González Castaño, *op. cit.*, pág. 298.

⁴ María Teresa Pérez Picazo, «La transición al capitalismo de la Región Murciana», en vv. aa., *Estudios sobre historia económica contemporánea de la Región de Murcia*, Murcia, Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia, 1983, págs. 69-72; Antonio José Mula Gómez y Juan Martínez López, *Murcia, claves del pasado*, Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1987, págs. 176-178.

⁵ Martínez Carrión, *op. cit.*, pág. 303. El reprochable fenómeno figura documentalmente corroborado en María Teresa Pérez Picazo, «La crisis agrícola y pecuaria», *Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 1, 1981, pág. 147, entre las respuestas referentes a Murcia contenidas en la información escrita de la comisión creada por real decreto de 7 de julio de 1887 para estudiar la crisis abierta en la agricultura y la ganadería; véase igualmente, id., *Oligarquía urbana y campesinado en Murcia, 1875-1902*, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1979, págs. 103-104.

⁶ V. gr., María Teresa Pérez Picazo y Guy Lemeunier, *El proceso de modernización de la región murciana (siglos XVI-XIX)*, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1984, pág. 399.

incidencia episódica u ordinaria, no estadísticamente descompasada, en cuanto se equilibran existencias y consumo⁷.

En el año 1888 el Tribunal Supremo dictaba un par de fallos denegatorios de la casación intentada por los reos convictos en sendos delitos contra la salud pública acaecidos uno en 1885 y otro en 1887. En ambos casos, el tipo penal aplicado dentro de tal sector criminológico o título del Código —vigente el de 1870— referíase en concreto a las malas prácticas comerciales afectantes a productos de consumo humano, lo que llama la milicia *munitiones de boca*, con abarcamiento tanto de la alteración para tan sensibles fines como de la venta de géneros corrompidos o nocivos: «el que con cualquiera mezcla nociva á la salud alterar las bebidas ó comestibles destinados á consumo público, ó vendiere géneros corrompidos, ó fabricare ó vendiere objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo á la salud, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prision correccional en su grado mínimo y multa de 125 á 1250 pesetas»⁸, pudiendo extenderse dicha privación de libertad, a la vista de la *tabla demostrativa* inserta en la ley, desde cuatro meses y un día hasta dos años y cuatro meses⁹. Asimismo, en uno y otro supuesto, la parte condenada insta el pronunciamiento del superior órgano jurisdiccional con invocación de un mismo precepto rituario, el que rezaba que «se entenderá que ha sido infringida una ley en la sentencia definitiva para el efecto de que pueda interponerse el recurso de casación [...] cuando los hechos que en la sentencia se declaren probados sean calificados y penados como delitos ó faltas no siéndolo [...]», motivo este al que además uno de los recursos acumulaba otro más previsto para «cuando constituyendo delito ó falta los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya cometido error de derecho en su calificación»¹⁰. Con el debido respeto a los resultandos fijados por el tribunal *a quo*¹¹ —la Audiencia Provincial de Murcia—, según es propio de este medio extraordinario de impugnación que no abre nueva instancia, el Supremo rechazó las suposiciones, aducidas por los disconformes reos, de haberse infringido, al declararlos tales, las formalidades del Enjuiciamiento Criminal.

La primera resolución, cuyos hechos desencadenantes se remontan a más reciente fecha que la segunda, pues ni en un año preceden a su conocimiento por los

⁷ Jesús Pérez de Espinardo, *El libro del pimentón*, Murcia, Turbinto Sociedad Cultural de Murcia, 2000, págs. 63-87.

⁸ «Ley, autorizando al Ministro de Gracia y Justicia para plantear como provisional el adjunto proyecto de reforma del Código penal», de 17 de junio de 1870, en *Colección Legislativa de España*, t. 103, disp. 370, págs. 905-1032 [Código Penal de 1870], art. 356, párr. 1º.

⁹ Código Penal de 1870, art. 97.

¹⁰ «Ley de Enjuiciamiento Criminal», de 14 de septiembre de 1882, en *Colección Legislativa de España*, t. 129, disp. 555, págs. 884-1062, art. 849.1º y 3º.

¹¹ Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 897, párr. 2º.

eminentes magistrados, pone el énfasis o se esfuerza en la delimitación material de las conductas incluíbles en la tipicidad normativa como generadoras de la amenaza colectivamente acusada que se tiende a precaver, con calafateo en lo posible de todo resquicio comisivo a cuyo través la salubridad vecinal viniera a verse expuesta:

Recurso de casación (28 de Enero de 1888).— Sala segunda.— *Delito contra la salud pública.*— No ha lugar al interpuesto por Andrés Jimeno (Audiencia de Murcia), y se resuelve:

Que no sólo castiga el art. 356 del Código penal al que con cualquiera mezcla nociva á la salud alterase las bebidas ó comestibles destinados al consumo público, sino también al que fabricase ó vendiese objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo á la salud.

En villa y Corte de Madrid, á 28 de Enero de 1888, en el recurso de casación por infracción de ley, que ante Nos pende, interpuesto por Andrés Jimeno Calafat contra la sentencia pronunciada por la Audiencia de lo criminal de Murcia, en causa por delito contra la salud pública:

Resultando que vista en juicio oral y público la referida causa, dicha Audiencia dictó la expresada sentencia en 15 de Octubre último, consignando los hechos en los siguientes:

Resultando que Andrés Jimeno Calafat, tratante en pimiento molido, llevó al molino de San Francisco de esta ciudad una cantidad bastante respetable de cáscara de almendra, jabón de sastre y grana escarlata, y la molió en la noche del 4 al 5 de Marzo del año último, llevándosela á su casa, de donde desapareció al poco tiempo; hechos probados:

Resultando también probado que las sustancias molidas por Andrés Jimeno en cantidad de unas 35 á 40 arrobas, son nocivas á la salud y aprovecha sólo para mezclarlo con el pimiento molido:

Resultando que dirigido el procedimiento contra el citado Jimeno, se confiesa autor del hecho que se deja relatado en el primer resultando, si bien asegura que lo hizo por encargo de una persona de Orihuela que le era desconocida y que se destinaba para dar color á los ladrillos finos:

Resultando que la Audiencia de lo criminal de Murcia declaró que los hechos probados constituyen un delito contra la salud pública, previsto y penado en el art. 356 del Código penal, del que es responsable en concepto de autor Andrés Jimeno Calafat, sin circunstancias modificativas, y le condenó á la pena de un año y un día de prisión correccional, multa de 250 pesetas, y al pago de las costas, con el apremio personal en su caso:

Resultando que contra esta sentencia se preparó recurso de casación por infracción de ley por parte del procesado, que se ha interpuesto fundado en el núm. 1º del art. 849 de la ley de Enjuiciamiento criminal, citando como infringidos:

1º. El art. 356 del Código penal por aplicación indebida, pues éste no pena al que fabrica una sustancia que, mezclada con otra, puede ser nociva, sino al que fabrica objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo:

2º. El mismo artículo en cuanto no es hecho probado que el procesado realizase la mezcla de la sustancia nociva:

3º. El mismo artículo en cuanto tampoco se determina que se vendiesen los géneros corrompidos ó adulterados; y

4º. Una vez más la infracción del referido art. 356, resumiendo la improcedencia de su aplicación en los tres conceptos ya citados.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Antonio Garijo Lara:

Considerando que no sólo castiga el art. 356 del Código penal al que con cualquiera mezcla nociva á la salud alterase las bebidas ó comestibles destinados al consumo público, sino también al que fabricase ó vendiese objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo á la salud:

Considerando que en la sentencia recurrida se declara que el tratante en pimiento molido, Andrés Jimeno Calafat, fué el que preparó [la] sustancia necesariamente nociva, porque no podía tener otra aplicación que la de mezclarla con el pimiento molido, y ya fuera Jimeno Calafat el que hiciera la mezcla con el pimiento molido de aquella sustancia nociva que preparó, ya se la facilitara á una tercera persona para que le diera la única aplicación que podía tener, según expresa la sentencia, su responsabilidad está dentro de los términos del citado art. 356, que acertadamente aplica la Audiencia de Murcia, siendo, por tanto, improcedente la casación que por infracción de ley pretende la representación de Andrés Jimeno Calafat;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación que por infracción de ley ha interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia de lo criminal de Murcia Andrés Jimeno Calafat, á quien condenamos en todas las costas del recurso y al pago de 125 pesetas si mejorase de fortuna, por razón del depósito que, como insolvente, no ha constituido; y comuníquese esta resolución al Tribunal sentenciador á los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, sacándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. –El Sr. D. Emilio Bravo votó en Sala y no pudo firmar: Eduardo Martínez del Campo. –Eduardo Martínez del Campo. –Federico Enjuto. –Miguel de Castells. –Antonio Garijo Lara. –Diego Montero de Espinosa. –Federico Melchor y Lamanette.

Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excelentísimo Sr. D. Antonio Garijo Lara, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública su Sala segunda, en el día de hoy, de que certifico como Secretario Relator de ella.

Madrid 28 de Enero de 1888. –Doctor Enrique Medina.

(Sentencia publicada el 28 de Enero de 1888, é inserta en la *Gaceta* de 7 de Mayo del mismo año)¹².

Diez meses después, vísperas del equinoccio de otoño, la sala segunda ha de ocuparse otra vez de un lance similar también con Murcia como escenario, solo que, si el recién atendido quedaba circunscrito hasta el momento de su detección al abasto local, este que ahora va a enfocarse venía encaminado a la comercialización exterior mediante el transporte ferroviario de la irregular mercancía, aún novedad distribuidora por aquel entonces, toda vez que el trazado de Alicante a Murcia, que explotara una expansiva Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, se inauguraba en 1884 (y al año siguiente, el de los hechos, comenzaría a ejecutarse la línea a Granada)¹³. La intervención del cimero tribunal va a insistir en dos puntos ya más que consolidados en su haber exegetico: uno general y referido a la irrelevancia del lugar u orden de la sentencia en que se consignent como probados los hechos, pues en todo caso la proclamación surtirá el efecto de precisar el relato factual al que haya de sujetarse el recurso de casación; otro particular del delito perseguido, cual es su consumación anticipada —como delito de riesgo— al simple hecho de disponer los géneros para su introducción en el tráfico mercantil o, en otras palabras y abundando en nociones ya apuntadas en el cuerpo de la sentencia precedente, destinarlos al consumo público, aunque no hayan llegado siquiera a penetrar en el mercadeo al detall y permanezcan todavía en un nivel operativo de productores, mayoristas o intermediarios.

Recurso de casación (19 de Octubre de 1888).— Sala segunda.— *Delito contra la salud pública*.— No ha lugar al interpuesto por Antonio Alcántara (Audiencia de Murcia), y se resuelve:

Que al afirmar la Sala sentenciadora que una sustancia aprehendida al procesado es nociva á la salud, según el informe pericial, asienta un hecho que sirve de fundamento al fallo y que ha de aceptarse cualquiera que sea el lugar de la sentencia en que se consigne, entendiéndose, por tanto, comprendida la venta de dicha sustancia en la sanción del art. 356 del Código:

Que dedicado habitualmente el culpable á la expendición de la sustancia mencionada, no es necesario para que aquel delito se consume que la aprehensión del género

¹² *Jurisprudencia criminal: colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en los recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus salas segunda y tercera en 1870 con un índice cronológico y un repertorio alfabético de las cuestiones y puntos de derecho que en unos y otras se resuelven*, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1889, t. 40, págs. 170-171, nº 84. Igualmente, STS 465/1888, de 28-I [id. Cendoj 28079120011888100306].

¹³ Domingo Cuéllar Villar, «La Región de Murcia, en clave de caminos», *Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 29, 2010, pág. 158.

adulterado haya de hacerse en el acto de la venta, sino que basta, por razón de dicha habitual industria, el encontrarlo en los almacenes ó puestos donde la presente á la venta.

Sentencia de 19 de Octubre, declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Antonio Alcántara Fuentes, contra la pronunciada por la Audiencia de lo criminal de Murcia, en causa seguida al mismo por el expresado delito.

En la villa y corte de Madrid, á 19 de Octubre de 1888, en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos pende, interpuesto por Antonio Alcántara Fuentes contra la sentencia que dictó la Audiencia de lo criminal de Murcia, en juicio oral y causa por delito contra la salud pública:

Resultando que dicha sentencia, dictada en 4 de Julio último, contiene los siguientes resultandos:

Primero. Probado que en la mañana del 19 de Abril de 1885 fué detenido un carro con nueve sacas que contenían ocho arrobas de pimiento molido cada una, ó sean en junto 72 arrobas, destinadas á embarcarlas en el ferrocarril con dirección á Barcelona, cuyo pimiento fué detenido por sospechas de que estaba adulterado:

Segundo. Que entregada una muestra de dicha sustancia á los peritos D. Juan López Gómez, Doctor en Farmacia, y Don Francisco Medina y Romero, Doctor en Medicina, del examen físico-químico practicado aparece que dicho pimiento se compone, en su mayor parte, de cáscara de almendra teñida con materia colorante artificial, y la parte de verdadero pimiento, sobre ser muy poca, es de ínfima clase, dando por resultado que el conjunto es nocivo á la salud, tanto porque la parte extraña leñosa no es digerible, como por la intoxicación, siquiera sea lenta, de la materia colorante reputada venenosa, y porque asimismo la cantidad en que se adiciona á los embutidos es grande y producen en ellos su alteración; y

Tercero. Probado que el pimiento cogido é inutilizado por orden del Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento es de la propiedad del procesado, Antonio Alcántara Fuentes, tratante que se dedica á la compra de pimiento y su venta para la exportación:

Resultando que la referida Audiencia calificó los hechos expuestos como constitutivos de delito contra la salud pública, previsto y penado en el art. 356 del Código penal, y condenó á su autor, Antonio Alcántara, á un año y un día de prisión correccional, accesorias y costas:

Resultando que contra esta sentencia se ha interpuesto por dicho procesado recurso de casación por infracción de ley, fundado en los números 1º y 3º del art. 849 de la de Enjuiciamiento criminal, designando como infringidos:

1º. El art. 3º, en relación con el 356 del Código penal, porque el hecho no debió ser calificado de delito consumado, sino de tentativa, ó cuando más de frustrado:

2º. El 356 citado, que no es aplicable al caso, porque el recurrente ni fabricó ni vendió el pimiento; y

3º. El mismo artículo, porque no consta que éste fuese nocivo, por no estar declarado probado en la sentencia el resultando en que este hecho se consigna, cuyo recurso fué admitido é impugnado *in voce* por el Ministerio fiscal.

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Diego Montero de Espinosa:

Considerando que al consignar la Audiencia sentenciadora que el pimiento aprehendido al recurrente era nocivo á la salud según el informe pericial, afirma un hecho capital que sirve de fundamento al fallo, y cuyo hecho se ha de aceptar cualquiera que sea el lugar de la sentencia en que se consigne, y por lo tanto, aun cuando no contienen la declaración de probados los hechos que se consignan en el segundo resultando de la misma, como sólo se refiere en él al informe pericial y éste se acepta como hecho probado en el primer considerando para calificar el delito, no cabe duda que el pimiento aprehendido era nocivo á la salud, y por consiguiente comprendida su venta en la sanción del art. 356 del Código:

Considerando que dedicado habitualmente Antonio Alcántara á la expendición de pimiento molido, no es necesario para que el delito de que se trata se consume que la aprehensión del género adulterado haya de hacerse en el acto de la venta, sino que basta, por razón de su habitual industria, el encontrarlo en sus almacenes ó puestos donde los presente á la venta, y mucho más cuando se aprehende, como en el presente caso, al conducirlo en cantidad considerable á la estación del ferrocarril para transportarlo á un mercado donde no podía tener otro propósito que el de realizar su venta:

Considerando, por lo tanto, que la Audiencia sentenciadora no ha incurrido en el error de derecho ni infringido las disposiciones legales que se suponen en el recurso;

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al interpuesto contra la sentencia que dictó la Audiencia de lo criminal de Murcia por Antonio Alcántara Fuentes, á quien condenamos en las costas, y al pago de 125 pesetas por vía de depósito, si mejorase de fortuna; comuníquese esta resolución al Tribunal sentenciador á los efectos oportunos.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid y en la Colección legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. –Emilio Bravo. – Eduardo Martínez del Campo. –Mateo de Alcocer. –Federico Enjuto. –Rafael Álvarez. – Antonio Garijo Lara. –Diego Montero de Espinosa.

Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Excelentísimo Sr. D. Diego Montero de Espinosa, Magistrado del Tribunal Supremo, estándose celebrando audiencia pública su Sala segunda, en el día de hoy, de que certifico como Secretario de la misma.

Madrid 19 de Octubre de 1888. –Licenciado Bartolomé Rodríguez de Rivera.

(Sentencia publicada el 19 de Octubre de 1888, é inserta en la *Gaceta* de 6 de Enero de 1889)¹⁴.

¹⁴ *Jurisprudencia...*, t. 41, págs. 576-577, nº 262. Igualmente, STS 432/1888, de 19-X [id. Cendoj 28079120011888100273].

Por consiguiente, ambos procesos concluyen en desestimarse la pretensión de los inculcados, ratificándoles así el castigo impuesto a una codicia capaz de pasar por encima de cualesquiera consideraciones de miramiento o conmiseración respecto de la indemnidad ajena. No exigido el *animus lucrandi* por el tipo penal, tampoco deja de ser cierto que por lo más común, si no siempre, subyace semejante móvil o propósito a esta clase de transgresiones contra la incolumidad pública y, a todas luces, no se halla ausente en ninguno de estos dos episodios, aunque la acción definitoria no llegue en último término a cuajar en la estafa a que tendencialmente se enderezaba el proceder nocente: el quebranto para la salud en general se ha visto completado al menos como difusa puesta en riesgo, pero la defraudación económica no, aun buscada y columbrable al final del *iter criminis*. Comoquiera, cabe la procedencia de las normas concursales —las de carácter ideal— en cuanto, sobrepasada la inocuidad hacia la nocividad, aparezcan los elementos configurativos del efectivo ánimo de lucro, el engaño bastante, el error consecuente y el desplazamiento o menoscabo patrimonial¹⁵.

No uno más junto al asociacionismo y la inspección administrativa, sino el resguardo de veras enérgico contra tan desalmados comportamientos, la represión punitiva opuso igualmente su dique contra los abusos y de cara precisamente a «[...] la expansión a partir de las décadas finales del siglo XIX»¹⁶ para ese sector de la industria pimentonera en el que a la sazón Murcia llegaba a ocupar posición cabecera a escala peninsular con irrupción ya en los circuitos internacionales. Más allá de su significación en la historia económica, la ventilación forense de las conculcaciones de referencia, al alcanzar aquí la máxima cota jurisdiccional, adquiere algún otro relieve a título no solo de concreción jurídica particular, sino con repercusión extensible en adelante a nuevos supuestos que con identidad o substancial similitud de conflicto se planteen; y así hubieron de pasar a los repertorios y diccionarios jurisprudenciales las comentadas sentencias¹⁷, en su

¹⁵ Carlos Vázquez Iruzubieta *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1988, pág. 1748. Amplíese en Octavio de Toledo y Ubieto, «Notas para un estudio de los fraudes alimentarios en Derecho Penal», *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 57, 1979, págs. 102 y ss.

¹⁶ Martínez Carrión, *op. cit.*, pág. 303.

¹⁷ V. gr., Vicente Romero y Girón, *Manual de jurisprudencia penal ó diccionario recopilador de los fallos dictados por el Tribunal Supremo sobre aplicación del vigente Código penal, desde su publicación en 1870, hasta fin de 1891*, Madrid, Centro Editorial de F. Góngora, 1893, pág. 193; Manuel Aleu, *Código penal de España con todas las modificaciones en él introducidas hasta 1906. Anotado profusamente con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y concordado con las demás leyes y disposiciones sobre materia penal; adicionado con las disposiciones relativas al abono de prisión preventiva; cumplimiento de condenas y ejercicio de la gracia de indulto, y con la ley de Represión de los delitos contra la Patria y el Ejército de 15 de Abril de 1906 y circular para su aplicación*, Madrid, El Secretariado, 1906, pág. 239; Manuel López-Rey y Arrojo y Félix Álvarez-Valdés, *El nuevo Código Penal: notas, jurisprudencia, tablas, referencias, etc.*,

proyección junto a otras concomitantes como guía directriz hacia la realización del Derecho, eslabones todas en esa cadena o serie doctrinal, interpretativa, que de modo reiterado va estableciendo el Tribunal Supremo para unificar la aplicación de las normas a la realidad o, con arreglo a lo que oficialmente se estatuirá desde 1974, para complementar el ordenamiento jurídico sobre la base primaria de las fuentes propiamente dichas: ley, costumbre y principios generales del derecho¹⁸.

Bibliografía manejada

Aleu, Manuel, *Código penal de España con todas las modificaciones en él introducidas hasta 1906. Anotado profusamente con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo y concordado con las demás leyes y disposiciones sobre materia penal; adicionado con las disposiciones relativas al abono de prisión preventiva; cumplimiento de condenas y ejercicio de la gracia de indulto, y con la ley de Represión de los delitos contra la Patria y el Ejército de 15 de Abril de 1906 y circular para su aplicación*, Madrid, El Secretariado, 1906.

Boletín Oficial del Estado.

Cendoj [<https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>].

Colección Legislativa de España.

Cuéllar Villar, Domingo, «La Región de Murcia, en clave de caminos», *Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 29, 2010, págs. 156-163.

Gaceta de Madrid.

González Castaño, Juan, *Breve historia de la Región de Murcia*, Murcia, Tres Fronteras, 2009.

Jurisprudencia criminal: colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en los recursos de casación y competencias en materia criminal desde la instalación de sus salas segunda y tercera en 1870 con un índice cronológico y un repertorio alfabético de las cuestiones y puntos de derecho que en unos y otras se resuelven, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1889.

Madrid, *Revista de Derecho Privado*, 1933, pág. 321; Manuel Rodríguez Navarro, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, Madrid, Aguilar, 1947/1966, t. II, págs. 3178, 3182.

¹⁸ «Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto articulado del título preliminar del Código Civil», en *Boletín Oficial del Estado*, 163, 9-VII-1974, disp. 13478, págs. 14269-14275, que positiva este nuevo art. 1º.6 al que continuamos ateniéndonos.

López-Rey y Arrojo, Manuel, y Álvarez-Valdés, Félix, *El nuevo Código Penal: notas, jurisprudencia, tablas, referencias, etc.*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1933.

Martínez Carrión, José Miguel, *Historia económica de la Región de Murcia: siglos XIX y XX*, Murcia, Editora Regional de Murcia, 2002.

Mula Gómez, Antonio José, y Martínez López, Juan, *Murcia, claves del pasado*, Murcia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 1987.

Pérez de Espinardo, Jesús, *El libro del pimentón*, Murcia, Turbinto Sociedad Cultural de Murcia, 2000.

Pérez Picazo, María Teresa, «La crisis agrícola y pecuaria», *Áreas: Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 1, 1981, págs. 134-153.

Pérez Picazo, María Teresa, *Oligarquía urbana y campesinado en Murcia, 1875-1902*, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1979.

Pérez Picazo, María Teresa, «La transición al capitalismo de la Región Murciana», en vv. aa., *Estudios sobre historia económica contemporánea de la Región de Murcia*, Murcia, Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Región de Murcia, 1983, págs. 59-73.

Pérez Picazo, María Teresa, y Lemeunier, Guy, *El proceso de modernización de la región murciana (siglos XVI-XIX)*, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1984.

Rodríguez Llopis, Miguel, *Historia de la Región de Murcia*, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1998.

Rodríguez Navarro, Manuel, *Doctrina penal del Tribunal Supremo*, Madrid, Aguilar, 1947/1966.

Romero y Girón, Vicente, *Manual de jurisprudencia penal ó diccionario recopilador de los fallos dictados por el Tribunal Supremo sobre aplicación del vigente Código penal, desde su publicación en 1870, hasta fin de 1891*, Madrid, Centro Editorial de F. Góngora, 1893.

Toledo y Ubieto, Octavio de, «Notas para un estudio de los fraudes alimentarios en Derecho Penal», *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 57, 1979, págs. 55-136.

Vázquez Iruzubieta, Carlos, *et al.*, *Doctrina y jurisprudencia del Código Penal*, Madrid, Editoriales de Derecho Reunidas, 1988.